

Embarcaron a todo el bloque en una pelea perdida, por cuanto la sola acción extrema facilitó a la flamante Vicepresidente a reunir al resto de la Cámara, esto es a los 39 senadores restantes, a los que la sola idea de impedir la continuidad del kirchnerismo fue suficiente para asestarle un golpe demoledor.

Por primera vez en cuatro décadas, el peronismo perdió el control del Senado. Fue por todo y se quedó, en primera instancia, sin la Presidencia provisional, sin la Secretaría Parlamentaria, la Secretaría Administrativa y las prosecretarías, y en una sesión siguiente sufrió una segunda derrota perdiendo el control de las Comisiones donde todas las Presidencias, y la mayoría dentro de ellas, fueron para los no kirchneristas, incluida la comisión del DNU donde de los ocho espacios sólo tres quedaron para Unión por la Patria.

Si esto pasa en el PJ, en la UCR la cosa dista de ser mejor. La dupla Lousteau-Morales se las ve en figurillas con los hermanos Manes, que son dos elefantes en una cristalería, en medio de la casi desesperación de los gobernadores ucerreistas a los que le toca bailar con la más fea. La Coalición Cívica no tiene problemas internos. Mantiene su verticalidad para con Carrió, pero el problema de ellos es que tienen un futuro incierto por la diáspora que se observa en lo que fue Juntos por el Cambio, donde a hoy 11 de febrero pareciera claro que el PRO se dirige a un acuerdo con Milei en el que confluyen Macri y Bullrich, y la UCR tiene por delante la redefinición de lo que podría ser 2027, en el que le va a costar, al menos a hoy, proyectar un polo de poder liderado por un radical como espacio diferenciado de lo que pueda ser el peronismo o la previsible alianza entre Milei y el macrismo.

Aquí asoma el error, grave por cierto, de un peronismo que sin Norte ni rumbo y sin conducción ni estrategia se dedicó a hacer antimileisismo, lo cual hizo que el oficialismo se abroquele con el macrismo con quien en realidad, y hasta la última semana, había tenido como socio adherente sin abrirle la puerta para tener voz, voto y presencia reconocida.

De ahí que hablar, como se ha hablado, de la torpeza política de Milei en este tiempo quizás haya sido ir en exceso. La torpeza mayor, cada uno por su lado fue de justicialistas y radicales que se suponía eran políticos de experiencia, al menos algunos de ellos, y que terminaron el trámite de la Ley Ómnibus con las patas para arriba.

¿Fue entonces una derrota política de Milei lo de Diputados? Quizás no, a poco que se vea como quedaron las cosas. No logró lo que quería, cierto es, en lo económico y lo que podría lograr ya no le interesaba. Dio rápido vuelta la página y pasó al rédito político de ganar perdiendo, que es lo que sucedió en verdad.

Con la ley aprobada, la pelota hubiera quedado en el Gobierno, al que le exigían resultados inmediatos en lo económico que difícilmente iban a llegar. Ahora "la casta" pasa a ser responsable de que no salgan las cosas en el tiempo que la sociedad espera. De ahí entonces la decisión y la orden que llegó desde Israel, de patear el tablero. Una decisión meditada y calculada, en verdad, en la que en la relación costo-beneficio se lograba por un lado dividir a los buenos de los malos, y echar a éstos los costos políticos de la caída de la ley.

No hay una postura impostada en Milei. Cree en el enfrentamiento con la casta política y cree que los políticos son los que quieren seguir con todos sus nego-

cios. "Nosotros tenemos que resolver la inflación primero y la inseguridad después", es el razonamiento de la mesa chica del Presidente.

Esto nos sirve como "un circo y como una distracción", mientras "intentamos avanzar con las otras y esperar los resultados", dicen.

"Si salía la ley nos iban a pedir resultados inmediatos. Nosotros tenemos que instalar que las cosas que no salen son por culpa de la casta. La decisión del Gobierno de dejar de enviar fondos de coparticipación a las provincias ya incluyó los fondos para los salarios docentes que incluía a la Nación entre las 24 provincias para establecer un piso salarial nacional. En enero las transferencias nacionales discrecionales enviadas a provincias y Caba cayeron un 98 por ciento interanual real. La Nación le envió a las provincias sólo el 2 por ciento de lo que les envió el año pasado. Tucumán, San Juan y San Luis ya anunciaron fuertes reajustes del gasto. Axel tuvo que reconocer que reducirá a la mínima expresión la obra pública en la provincia y tiene como objetivo "reconducir" los reclamos de los maestros bonaerenses de La Plata al Palacio Pizzurno.

El cálculo de la Rosada es que la inflación irá desacelerando y la recesión pegará fuerte, pero por un período corto. En sus estimaciones, la inflación debería estar en un dígito y la economía rebotando en el famoso segundo semestre, cuando empiece a impactar la

entrada de dólares del campo.

Marzo y abril serán los meses más difíciles, reconocen. Y apuestan a no tener desbordes sociales porque los más afectados serán los sectores de la clase media "que no tiran piedras. Si hay un desborde social es organizado, no espontáneo", repiten y aseguran que la política de mano dura que lleva a cabo Patricia Bullrich, que dio rienda libre a las fuerzas de la Seguridad, es parte de la partitura que pide una sociedad cansada de los piquetes, las marchas y en general la inseguridad, algo que reflejan las encuestas que nutren la estrategia de Santiago Caputo, cerebro del Gobierno, que tiene sobre la mesa los sondeos que le dan letra a lo que vuelca en las redes sociales el propio Presidente.

"La reforma no se dio de baja, sólo entró en un impasse", dice un miembro del Gabinete. La idea más instalada en el Gabinete de Javier Milei por estas horas es dejar pasar unos días "mostrándole los dientes a los gobernadores" y luego empezar a avanzar con resoluciones y decretos que permitan implementar algunos de los cambios que estaban en la ley y que quedaron en el camino.

En la Rosada están convencidos de que la economía le da oxígeno mientras le ajusta el cinturón a las provincias con el recorte drástico de transferencia de fondos.

Sigue en página 8



MALESTAR CON LEGISLADORES Y GOBERNADORES. La caída de la Ley Ómnibus fue un cimbronazo para los empresarios, algunos de los cuales les venían aconsejando a gobernadores que no tensaran tanto la negociación. "Ustedes no entienden cómo razona esta gente", les dijo el líder de una Cámara. Tenían indicios de que, desde que se quitó del proyecto la parte fiscal, al Gobierno le importaba más el manejo del poder que la sanción de la ley. Hace ya tres semanas, cuando Santiago Caputo se metió en la discusión parlamentaria, advirtió: "Mirá que te bajo la ley: no tengo problemas en retirarla. Los voy a exponer y bânquensela". Con todo, las empresas celebran que siga en pie una parte importante del DNU. "Nos estamos adecuando a la oferta y la demanda, como en los 78 países que hacen lo mismo", y saludan con entusiasmo que en unas semanas entra como proyecto por separado la Reforma Laboral.



UNO DE LOS TABÚES DE LA POLÍTICA. El proyecto de la Ley de Bases empezó a caerse con el cuarto intermedio. Algo de lo cual los correntinos tenemos mucha experiencia remitiéndonos a los sucesivos colegios electorales que terminaron con tres intervenciones federales sucesivas. En el medio operan las fuerzas del infierno, estas son los lobbies siempre aceitados. Durante ese impasse, que duró cuatro días, se multiplicaron los llamados a diputados, principalmente por el tema que inició la serie de ocho rechazos en la votación particular: las facultades delegadas para eliminar o modificar fondos fiduciarios públicos. Es una cuestión sensible. Uno de los grandes tabúes de la dirigencia política. Los fondos fiduciarios públicos, la mayoría de los cuales están destinados a desarrollos en distintas provincias, fueron creados en 1994 por Menem. Es una caja tan atractiva que varios ministros de Economía quisieron incorporarlos a los gastos de la Secretaría de Hacienda y fracasaron. Los últimos fueron Silvina Batakis y Sergio Massa. Los 29 fondos fiduciarios públicos nacionales que existen, sin contar los provinciales y municipales, le cuestan al país alrededor de un 2% del PBI. Es una cifra monstruosa. Con semejante proporción de fondos se podría, por ejemplo, llevar las jubilaciones al nivel de 2017, cuando empezaron a caer. Pero el cálculo no es tan sencillo porque, en muchos casos, estos fideicomisos cumplen funciones que de otro modo debería cubrir el Estado. En todo caso, las objeciones a estos instrumentos han sido siempre la escasa transparencia con que se manejan: son una verdadera caja de la política, de ahí la resistencia que al unísono legisladores, de distintos espacios, de manera transversal fueron funcionales al tiro de gracia a uno de los artículos que más intereses afectaba.